

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Folio del 8 de febrero de 1994

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Licda. **MARIBLANCA STAFF WILSON** en contra del párrafo segundo del artículo 26, del Código de Comercio.

MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - Pleno. - Panamá, ocho (8) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) -

V I S T O S :

La Licenciada **MARIBLANCA STAFF WILSON** ha demandado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio de la República de Panamá, por ser violatorio de los principios consagrados en los artículos 19, 20 y 83 de la Constitución Política vigente y del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General, Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Cumplidos los requisitos señalados en los artículos 158 y siguientes del Código Judicial para estos procesos, procede resolver a continuación el presente negocio constitucional.

I. NORMA ACUSADA.

El artículo 26 del Código de Comercio se transcribe a continuación, destacando el párrafo segundo de esa norma, cuya inconstitucionalidad se demanda:

Artículo 26. Los comerciantes que no estén en la lista sin límite expresa ni en la lista con límite, quedan sujetos al código, cuando aquellos sean comerciantes de la zona de libre comercio, y cuando aquellos no sean comerciantes de la zona de libre comercio, cuando el código de una legislación posterior por el presente código de comercio sea derogado.

II. LA DEMANDA.

En su demanda el actor afirma que el referido párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio, pugna con el artículo 19 de la Constitución Nacional vigente cuyo texto es el siguiente:

Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

La recurrente expresa que el mencionado párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio discrimina

a la mujer no solamente en virtud de su sexo, sino por razón de su estado civil, en cuanto que para su validez los actos mercantiles ejecutados por la mujer casada, requieren una ratificación posterior del marido. Infringiendo directamente el artículo 18 de nuestra Carta Magna que prohíbe expresamente la discriminación entre varones y mujeres, por razón del artículo 25.

Una de las disposiciones constitucionales que considera violada la recurrente, es aquella contenida en la letra y espíritu de el artículo 1 de nuestra Carta Magna que consagra la garantía constitucional de igualdad ante la ley. El texto de esta norma constitucional es el siguiente:

Artículo 1º. Los panameños y las extranjeras son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, condición social, nacimiento, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen o condición económica, o por cualquier otra circunstancia que implique discriminación.

El párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución establece la igualdad de los panameños y las extranjeras ante la ley, sin distinción de sexo, raza, condición social, nacimiento, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen o condición económica, o por cualquier otra circunstancia que implique discriminación.

La recurrente alega en su demanda que como el principio constitucional transcrito establece la igualdad ante la Ley para todos los panameños, no hay justificación alguna para exigir que los actos mercantiles ejecutados por la mujer casada, requieran para su validez la ratificación posterior del marido. Afirma la recurrente que debe entenderse en un sentido real y razonable, que todas las personas que estén en igualdad de circunstancias jurídicas deben recibir el mismo tratamiento jurídico.

La recurrente también alega que el párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio viola directamente la garantía constitucional de igualdad de derechos de los cónyuges, consagrada en el artículo 5º de la Constitución Nacional vigente, que a la letra dice:

Artículo 5º. El matrimonio es el fundamento legal de la familia. Se funda en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley.

Observa la demandante que el párrafo segundo del artículo 26 del código de comercio viola el precepto

constitucional transcrito, por cuanto exige para la validez de los actos mercantiles ejecutados por la mujer casada, la ratificación posterior del marido, no exigiendo lo mismo para el caso contrario, con lo cual infringe la igualdad de los derechos de los cónyuges dentro del matrimonio tal y como está consagrado en el artículo 53 de nuestra Carta Magna, antes transcrito.

Por último, la recurrente alega en su demanda que el mencionado párrafo segundo del artículo 26 del código de comercio viola el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General, Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 que literalmente preceptúa:

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. En esta igualdad están comprendidos todos los individuos ante el derecho, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La recurrente denuncia de inconstitucionalidad, afirma la discriminación expresamente a la mujer, que ejecuta actos de comercio, por razón de su sexo y su estado civil.

III. OPINION DEL PROCURADOR.

El señor Procurador General de la Nación al emitir su opinión, refiere la Vista Civil del No. 11 de 21 de junio de 1994, en la que el Jefe de Sala de lo Civil de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, en el expediente No. 11 de 21 de junio de 1994, expresa que la recurrente alega que el artículo 26 del código de comercio viola el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General, Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 que literalmente preceptúa: "Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. En esta igualdad están comprendidos todos los individuos ante el derecho, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición." La recurrente denuncia de inconstitucionalidad, afirma la discriminación expresamente a la mujer, que ejecuta actos de comercio, por razón de su sexo y su estado civil. El Procurador General de la Nación, al emitir su opinión, refiere la Vista Civil del No. 11 de 21 de junio de 1994, en la que el Jefe de Sala de lo Civil de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, en el expediente No. 11 de 21 de junio de 1994, expresa que la recurrente alega que el artículo 26 del código de comercio viola el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General, Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 que literalmente preceptúa: "Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. En esta igualdad están comprendidos todos los individuos ante el derecho, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición." La recurrente denuncia de inconstitucionalidad, afirma la discriminación expresamente a la mujer, que ejecuta actos de comercio, por razón de su sexo y su estado civil.

El representante del Ministerio Público una vez examinado el texto completo del párrafo segundo del artículo 26 del código de comercio, considera que crea una situación jurídica privilegiada para el hombre en relación a la mujer, lo que lesiona el principio de igualdad jurídica de los cónyuges, consagrada en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional vigente. En cuanto a las otras violaciones, el señor Procurador de la Nación estima que el precepto en estudio en nada vulnera los principios constitucionales contenidos en los artículos 19 y 20 del Estatuto Fundamental, pues los privilegios que crea surgen en atención a un vínculo matrimonial existente, el que la ley prevé únicamente posible entre personas de sexos opuestos, y no en cuanto al sexo de las personas en sí, ajenas a otras consideraciones de tipo personal.

El señor Procurador en virtud de todos estos razonamientos considera que el párrafo segundo del artículo 26 del código de comercio deviene inconstitucional, razón por la cual, salvo mejor criterio, solicita que así se declare.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.

La demandante estima que el párrafo segundo del artículo 26 del código de comercio infringe los artículos 19, 20, y 53 de la Constitución Nacional vigente y el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para decidir la acción de inconstitucionalidad que motiva esta actuación de la Corte Suprema de Justicia, es necesario confrontar el párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio con las normas invocadas como infringidas.

A juicio del Pleno el párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio viola el artículo 20 de la Constitución Política que consagra el principio de igualdad ante la

Ley. Y esto es así porque el párrafo segundo del artículo 20 del Código de Comercio da un tratamiento jurídico distinto a la mujer casada, por razón de su estado civil, quien no pueda ejercer libremente actos de comercio ya que necesita que los mismos sean ratificados por su marido. Este tratamiento desigual, esta discriminación a la mujer casada constituye una violación del principio constitucional de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Carta Magna en los siguientes términos: **ARTICULO 20: Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley.....**

Recientemente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 20 del Código de Comercio, mediante sentencia fechada el 17 de enero de 1991. En la parte motiva de este fallo la Sala Plena expresó:

"En el artículo 20 la discriminación se demanda se oírte que la mujer casada requiere de autorización de su marido para ejecutar actos de comercio, los que deben quedar revocados, aunque no hayan sido autorizados por el marido, si la mujer tiene la declaración de nulidad del matrimonio correspondiente.

Se trata, por tanto, de una detestable discriminación por razón del estado civil de la persona, es decir, de la mujer, lo que pugna con el contenido del artículo 20 de la Constitución Política vigente que consagra la igualdad de todos los panameños ante la Ley.

tal como lo anotó Eugenio Raúl Zaffaroni en un reciente seminario regional sobre "Institución penal y mujer en América Latina y el Caribe", la desigualdad se refiere a la que se ha cometido a la mujer se genera en la hegemonía del poder que a través de un discurso desviado y sospechoso pretende legitimar el rol subordinado de la mujer.

El hecho de imponer discriminaciones como la que mantiene la clasificación de materia comercial en un ejemplo de lo que los tribunales civiles en su obra "La mujer y la violencia invisible" cuando sostiene que:

"Desigualdad = discriminación = violencias forman parte de un particular criterio de retroalimentación mutua que se despliega a través de la reproducción social de las diferencias, lo que que legitima tanto la desigualdad como las prácticas discriminatorias y, a la vez, invisibiliza las violencias mismas. En consecuencia, la existencia de tales legitimaciones es de gran importancia política ya que transforman al diferente en inferior frente a uno de los dos términos

centrales de esta formación social que "necesita" sostener sistemas de apropiación desigual: producción y reproducción fuertemente las condiciones que lo hacen posible" (op. cit., ed. Sudamericana, Buenos Aires, pag. 17).

En el caso que nos ocupa, la discriminación que se produce en el artículo 20 del Código de Comercio se deriva de la distinción entre la mujer casada y la que no lo es, ya que a la primera se le exige, para que sus actos de comercio tengan validez, la autorización del marido.

En el ordenamiento constitucional vigente las mujeres tienen plena igualdad siempre, no importa que sean o no casadas, por lo que debe eliminarse la posibilidad de que se pretenda restringir la validez de los actos ejecutados por la mujer casada luego de anularse el matrimonio.

Aunque el artículo demandado fue concebido para proteger a la mujer que actúa sin autorización del marido, no cabe duda que conlleva una discriminación ya que ninguna mujer en pleno goce de sus derechos civiles debe necesitar autorización del marido para ejecutar actos de comercio, el dicho contrario a la igualdad el privilegio que se establece en favor de la mujer que antes estuvo casada, tal como ocurre en el artículo 20 del Código de Comercio. Lo que se establece de hecho es que la que se excluye, disminuye la calidad de vida de una mujer que aspira legítimamente a ser considerada en el artículo de igualdad previos de la constitución civil y civil.

Toda mujer, sea o no casada, tiene plena capacidad legal para ejecutar actos de comercio, sin necesidad de autorización de su marido o terceros, por lo que es inconstitucional restringir el privilegio previsto

en el artículo 27 del Código de Comercio. Más aún, en el momento actual en que, según estudios económicos del EID, la participación de la población femenina en la fuerza laboral y actos de comercio de América Latina, representa unos 40 millones de personas, que en el año 2,000 alcanzará cerca de 50 millones, o sea una cuarta parte de la fuerza laboral de la región. Todos los programas de inversión para el progreso económico y social, apuntan hacia

el desarrollo integral de la mujer, no solo porque es un objetivo de equidad importante, sino también en una forma eficiente de aprovechar la productividad total de los recursos de la región (Véase Informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre "Progreso económico y social en América Latina, Tema especial: La Mujer Trabajadora en América Latina, 1990, pág. 264) (pp.7-10).

Por todo lo expuesto consideramos que le asiste la razón a la recurrente en cuanto al cargo de inconstitucionalidad que alega del párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio, por violación del artículo 20 de la Constitución Política.

Como la norma acusada debe ser declarada inconstitucional por esta violación a la Constitución, el Pleno considera innecesario confrontar este precepto con otras normas constitucionales.

Por las consideraciones que anteceden la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL, por estar en pugna con las garantías y principios que consagra el artículo 20 de la Constitución Política vigente, el párrafo segundo del artículo 26 del Código de Comercio cuyo texto es:

Asimismo serán válidos los actos mercantiles ejecutados por la mujer sin licencia expresa ni tácita del marido, cuando aquellos sean objeto de una ratificación posterior por el último*.

NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE

MIRTA A. FRANCESCHI DE AGUILERA

AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
CARLOS LUCAS LOPEZ
EDGARDO MOLINO MOLA
FABIAN A. ECHEVERS

ARTURO HOYOS
RODRIGO MOLINA A.
PAUL TRUJILLO MIRANDA
JULIO MANUEL FAUNDES

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

Lo anterior es fiel copia de su original
Panamá, 25 de abril de 1994
Yanixa Yuen de Díaz

Secretario General
Corte Suprema de Justicia